

EL URIBISMO DE IVÁN DUQUE Y LA CRISIS COLOMBIANA: REFLEXIONES A PARTIR DEL POST-ACUERDO DE PAZ

Yudi Lorena Gomez Bravo¹

RESUMEN

En este artículo, analizaremos los desafíos colombianos después de la firma del acuerdo de paz, considerando sus limitaciones y acciones gubernamentales que llevan a su no cumplimiento y creciente insatisfacción popular. El uribismo conservador y neoliberal del gobierno Duque ha conducido Colombia a una grave crisis política, social y económica, pocos años pasados desde la firma del acuerdo y su promesa de realizar cambios importantes en el sentido del avance y profundización de la democracia y respecto a los derechos humanitarios. En un primer momento, trazamos elementos importantes para comprender la política colombiana y la dinámica de su guerra civil, que se dio a partir de la década cuarenta tenemos en Colombia el primer líder populista Jorge Eliecer Gaitán dentro de la historia de este país, asesinado, este acontecimiento generó una onda de violencia dentro de todo el territorio. En Colombia intrínsecamente no fue impuesto un régimen militar, tampoco se dio una dictadura como en sus países vecinos, se estableció un pacto entre los dos partidos, este régimen fue el Frente nacional que perduro durante décadas, el cual no puso término a la violencia, sino que borró toda amenaza de guerra interpartidista. Al existir una democracia acordada se da el espacio para que las fuerzas de izquierda más radicales se movilizaran a través de las guerrillas, siendo uno de los principales objetivos para incentivar la apertura para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC. En seguida, tratamos del fenómeno político uribista y su herencia en el gobierno del actual presidente Iván Duque. Finalizamos al analizar la decepción del acuerdo de paz y las acciones del actual gobierno que coinciden con el mismo y ocasionan movilizaciones contrarias de rechazo en 2019 y 2021. De esta manera, en el desarrollo de este trabajo pretendemos evaluar los elementos centrales de la crisis democrática colombiana actual.

Palabras claves: Crisis democrática; Colombia; Acuerdos de paz.

THE URIBISM OF IVAN DUQUE AND THE COLOMBIAN CRISIS: REFLECTIONS FROM THE POST-PEACE AGREEMENT

ABSTRACT

In this article, we will analyze the Colombian challenges after the signing of the peace agreement, considering its limitations and government actions that lead to its non-compliance and growing popular dissatisfaction. The conservative and neoliberal uribism of the Duque government has led Colombia to a serious political, social and economic crisis, a few years after the signing of the agreement and its promise to make important changes in the sense of advancing and deepening democracy and with respect to the humanitarian rights. At first, we trace important elements to understand Colombian politics and the dynamics of its civil war, which began in the forties, we have in Colombia the first populist leader Jorge Eliecer Gaitan in the history of this country, assassinated, this event generated a wave of violence within the entire territory. In Colombia, a military regime was not intrinsically imposed, nor was there a dictatorship as in its neighboring countries, a pact was established between the two parties, this regime was the National Front that lasted for decades, which did not put an end to the violence, rather, it erased any threat of interparty war. The existence of an agreed democracy provides the space for the most radical leftist forces to mobilize through the guerrillas, being one of the main objectives to encourage the opening for the Revolutionary Armed Forces of Colombia FARC. Next, we deal with the Uribe political phenomenon and its legacy in the government of current President Ivan Duque. We finish by analyzing the disappointment of the peace agreement and the actions of the current government that coincide with it and cause contrary mobilizations of rejection in 2019 and 2021 In this way, in the development of this work we intend to evaluate the central elements of the current Colombian democratic crisis.

Keywords: Democratic Crisis; Colombia; Peace Agreements.

¹Mestranda em Políticas Públicas e Desenvolvimento pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). E-mail: yudilorenagomez@gmail.com.

POLÍTICA UNA MIRADA DESDE LA HISTORIA

A partir de la década cuarenta tenemos en Colombia el primer líder populista Jorge Eliecer Gaitán dentro de la historia de este país, asesinado, este acontecimiento generó una onda de violencia dentro de todo el territorio, generando la apertura para una crisis política interna, con el conflicto entre partidos políticos entre los seguidores de Gaitán y sus opositores generando una polarización social por cuenta de su asesinato, este periodo de conflicto fue conocido como “periodo de la violencia”. Como menciona Borda “violencia múltiple como un conjunto de hechos y procesos repulsivos vinculados en tiempo y espacio” (BORDA, 2005 p.13).

En la década de los sesenta dentro del contexto histórico mundial estaba la guerra fría, la crisis económica con la concentración de tierras, entre ese mundo polarizado de superpotencias e ideologías, surge en Colombia el movimiento guerrillero de izquierda, a su vez es la apertura para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC. Una de las medidas que el Estado presento para contrarrestar esta violencia, fue un régimen de democracia acordada o combinada, que sería impuesta por los principales partidos, conservador y liberal, los cuales permitía que solamente ellos llegasen al poder, o se intercalarían uno de cada vez, quien llegaría al poder (OLIVEIRA, 2019).

En Colombia intrínsecamente no fue impuesto un régimen militar, tampoco se dio una dictadura como en sus países vecinos, se estableció un pacto entre los dos partidos, este régimen fue el Frente nacional que perduro durante décadas, el cual no puso término a la violencia, sino que borró toda amenaza de guerra inter-partidista. Al existir una democracia acordada se da el espacio para que las fuerzas de izquierda más radicales se movilizaran a través de las guerrillas (OLIVEIRA, 2019).

Dentro del sistema sobre la hegemonía por vía dominante del mundo industrial sobre el trabajo, los campesinos, vieron como aliados a las fuerzas insurgentes, para este caso las Fuerzas Armadas de Colombia del Pueblo, que, con el apoyo social, su crecimiento fue exponencial (1950-1980). Dentro del contexto el apogeo de la industria ilícita (es decir de la coca) y el narcotráfico, establecidas como bases de la renta, de los acaudalados que perseguían el control, bajo la conformación de estructuras criminales y paramilitares. Es así como se forma una nueva forma de control armada por medio de la burguesía, para controlar las resistencias populares y la apropiación del negocio ilícito de las drogas (JIMÉNEZ, LIBREROS e *at.* 2021, p. 9-10).

Es así como lo menciona los autores en el que esa fuerza bajo el mando de la burguesía pasa a ser el sistema justiciero, en el que lo usan como mecanismo de poder en el que pueden silenciar voces a su antojo, generando en la sociedad terror, miedo, ante las diferentes injusticias sociales a los que son sometidos. De acuerdo con Jiménez, Libreros e *at.* (2021, p.10). “ (...) A Uribe Vélez se le suele vincular a los orígenes y el sostenimiento del paramilitarismo en Colombia y de allí su poder en el Palacio de Nariño (...) ”, en este escenario en una sociedad que está el narcotráfico, se establecen los actores de la política colombiana.

Las diferentes configuraciones por las que Colombia atravesó por un lado una disputa entre partidos políticos, el factor guerrillas, posteriormente el narcotráfico, se han generado

diferentes ciclos de terror y de violencia que se repiten con el transcurso de los años, así como actores y autores renacidos apenas cambian de nombre, pero continúan cometiendo los mismos crímenes, sucesivas generaciones de sicarios, paramilitares, narcotraficantes autodefensas que han hecho de la suya con la protección del Estado (BORDA, 2005).

Para la década de los noventa e inicio de los dos mil el gobierno de Pastrana en iniciativa del gobierno estadounidense ponen en marcha la estrategia gubernamental llamada Plan Colombia, con la finalidad de establecer la Paz dentro del territorio, a su vez se fomentó el comercio externo entre los dos países en pro del combate al narcotráfico, la sociedad colombiana fue testigo de una grande presencia militar extranjera en todo el territorio.

Con este proceso de implementación de paz y combate al narcotráfico, se intensifico una guerra civil, aumentaron las denuncias de irrespeto a los derechos humanos, pues han sido acusados de estar a favor de las autodefensas, grupos de derecha, y en contra de los grupos de izquierda, responsables por la mayoría de las masacres cometidas en las zonas rurales (PEREIRA, 2003).

Dentro de este contexto el país aparentaba que institucionalmente estaba todo perfecto, pues las elecciones estaban ocurriendo, solo que la violencia cada vez estaba siendo más frecuente, por todas las zonas del territorio con los diferentes actores, dentro de este mismo proceso histórico estaba siendo establecidas reformas neoliberales, privatizaciones de Estado, Colombia llega al siglo XXI aun con grande parte de estos problemas sin resolver, por más que la muerte de Escobar, no disminuyera por completo este ciclos de violencia aún prevalecen (OLIVEIRA, 2019). Dentro de este escenario marcado por el terror la autora Renata, explica en su libro “*Sem revoluções*” como:

A dinâmica política colombiana é muito particular já que o Estado disputa espaço com outros poderes paralelos, a mesmo tempo que fomenta alguns deles, como os grupos paramilitares, ou se torna fomentando por outro grupo como o crime organizado que infiltrou nas bases institucionais de sua democracia. (OLIVEIRA, 2019, p.63)

Son evidentes las transformaciones del territorio producto de las acciones de los grupos al margen de la ley y como lo expone la autora por parte del Estado, que promueve a través de sus acciones una disputa por el poder. Dentro de esta coyuntura enmarcada por el producto de estos conflictos conlleva a referirse a Colombia como un Estado fallido, a punto de colapsar por causa de las nuevas guerras marcadas por ola de violencia (GONZÁLEZ, 2014). De tal manera que como Alvares menciona en las tesis del conflicto:

En el año de 2002, con el gobierno de Uribe Vélez en Colombia (2002-2006 y 2006-2010), la interpretación del conflicto armado cambio gramatical y substancialmente. A partir de este gobierno fue impuesta la tesis de que en Colombia existe una guerra contra el terrorismo. Con esa tesis se descartó considerar las causas objetivas del conflicto de carácter estructural, pero también de desconocer los conflictos agrarios. Según esta tesis hay en las organizaciones guerrilleras una motivación de acción racional de apropiación de recursos económicos mediante acciones criminales y la participación en el narcotráfico. Esas acciones no tienen una finalidad ideológica de izquierda, sino que busca el enriquecimiento personal o de su grupo (ALVAREZ, 2017, p.12)

De esta manera como lo expone el autor expone la relación entre el conflicto armado y el problema agrarios. Según el informe nacional de desplazamiento forzado, enfatiza la relación entre el conflicto y el patrón de concentración de tierras, a pesar de la violencia y el conflicto, la economía campesina mantiene un papel importante en el sector agropecuario colombiano. Dentro de las razones estructurales del conflicto las disputas de tierra no se desvanecen, con la retirada de la FARC, que estaban bajo su dominio, nuevas disputas surgirán para su dominio (OLIVEIRA, 2019).

FENÓMENO POLÍTICO URIBISTA

Dentro de esta dinámica en la que el uribismo está asociado directamente con el paramilitarismo, responsables por los despojos de tierras y el desplazamiento forzado de millones de personas en su mayoría de las zonas rurales. Uribe y su aparato de miedo en el proceso de violencia estatal, son los responsables en desatar crímenes de guerra, manifestados en las grandes ejecuciones extrajudiciales de falsos positivos en el lapso de gobierno de 2002 y 2010 (JIMÉNEZ; LIBREROS; *et at.*, 2021).

El centro democrático es el partido creado por Uribe y del cual forma parte los sucesores en el gobierno colombiano, Santos y Duque, institución caracterizada por ser neoliberal, pero a su vez promueve la parapolítica, como una nueva forma de hegemonía dentro del Estado, en las que consecuentemente fuera del alcance de la justicia. Uribe como vocero ultraconservador ha conseguido permear en el pensamiento político, con su política de la seguridad democrática, impuesta durante sus gobiernos. Dentro de este contexto la concepción de seguridad es acoplada a los proyectos políticos de la derecha transnacional, cuya intención es su presencia en todo el territorio, bajo los intereses geopolíticos de los Estados Unidos (ESTRADA, 2019).

El uribismo, formado por una base social de la clase alta, que logra construir una hegemonía conservadora en importantes sectores populares construyendo así su poder. Se puede atribuir que inicio desde la alcaldía de Medellín y la gobernación, la guerra con el narcotráfico en esta región acabara con la dinámica de la parapolítica en el que protagoniza Uribe. Dentro de esta dinámica en la que se ve el paramilitarismo y la figura política que lo representa Álvaro Uribe, tiene la posibilidad de dominar las protestas y permitir un modelo neocolonial burgués, el cual se asume como una fuerza dominante que circula libremente entre lo legal y lo ilegal (JIMÉNEZ; LIBREROS; *et at.*, 2021).

De acuerdo con Oliveira (2019), se puede establecer que, en los últimos años, en el sector de la política colombiana, se ha visto inmersa y a su vez palpable de los escándalos políticos con el narcotráfico y los crimines de corrupción, dentro de los cuales:

Em 2018, o ex-presidente Álvaro Uribe passa a ser investigado por possível manipulação de testemunhas em caso remontado a 2012, quando o Senador Iván Cepeda vinculou Uribe a grupos paramilitares de Antioquia. Na época, Uribe afirmou que Cepeda engendrou uma trama manipulando informações e testemunhas e um processo foi aberto contra o senador. Agora Cepeda foi absolvido e Uribe será investigado. (OLIVEIRA, 2019, p.66)

De esta manera como la expone la autora este líder burgués que durante muchos años obstaculizo desde una perspectiva excluyente la democracia colombiana, es investigado por la manipulación de testigos después de más de una década de ostentar el poder y ejercer control sobre las instituciones, se da el inicio a una era en el que la sociedad colombiana conseguirá justicia, en un largo camino que falta por recorrer.

EL FRACASO DEL ACUERDO DE PAZ

Entre los meses de febrero y agosto del 2012, el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC - EP) mantuvieron los encuentros exploratorios con el objetivo de poner fin al conflicto armado nacional (Mesa de Conversaciones, 2017). A partir de estos diálogos, tras cuatro años de negociaciones en agosto del 2016, firmaron el Acuerdo Final.

El Acuerdo contempla seis puntos fundamentales, como: 1) la Reforma Rural Integral; 2) la Participación política y la Apertura democrática; 3) el Fin del conflicto (armado); 4) la Solución al problema de las drogas ilícitas; 5) un Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto, incluido un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; la Jurisdicción Especial para la Paz y compromisos sobre Derechos Humanos, y 6) los principios generales para la Implementación del Acuerdo Final en el que preveían los mecanismos y criterios para su monitoreo y verificación (PUELLO, 2019). El panorama de los acuerdos es bien diferente en relación con el tiempo, con las responsabilidades asumidas por el Estado y los gobiernos de la implementación de los acuerdos, el cual ha presentado una tendencia al incumplimiento. Se ha tornado más difícil y compleja inferir en la valoración de compromiso real del gobierno.

Desde la firma de los acuerdos, se ha evidenciado una masacre de líderes sociales, defensores de los derechos humanos, han pasado como inadvertidos dentro de esta guerra pactada solo en documentos por en los hechos, ellos representan un numero dentro los crímenes y sobre todo de víctimas. Estas personas defendían los derechos de las tierras, denunciaban actos de corrupción, presencia de actores armados, reclutamiento forzado, eran un punto vital dentro de la implementación de los acuerdos de paz.

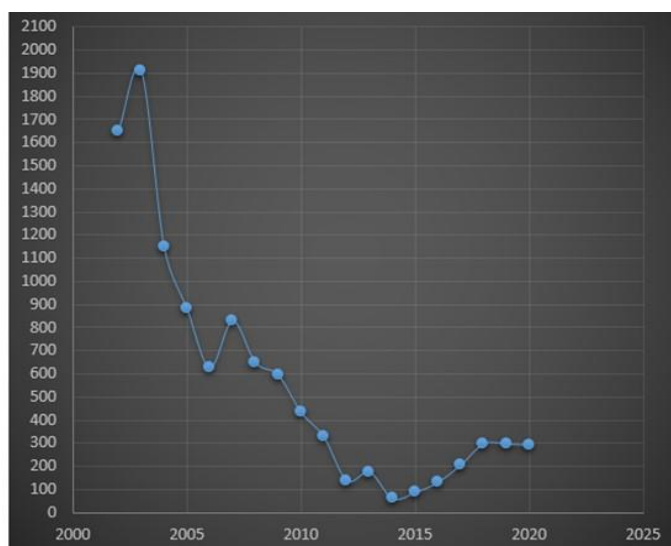
De acuerdo al informe de pos-acuerdo traumático: coletazos en la transición desde el acuerdo de paz al posconflicto, se puede observar en el siguiente tabla y gráfico 1 la relación de los asesinatos de los líderes, que entre enero de 2016 y el mismo mes de 2019 se registraron 438 casos de asesinatos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Esto quiere decir que durante los seis meses de la administración de Duque se han producido algo más de 100 asesinatos; crímenes que se sucedieron en 27 de los 32 departamentos y que comprometieron 142 municipios de Colombia. En 2020 se llegó a más de 291 líderes sociales asesinados. No se observa un quiebre de la tendencia en estos asesinatos que se acercan a la cifra de 2018. Las masacres se convirtieron en Colombia en parte de un sistema de control de poblaciones, territorios, riqueza y poder mediante el terror criminal (INDEPAZ, 2020).

Tabla 1: Asesinatos de líderes sociales 2002 - 2020

AÑO	ASESINATO DE LÍDERES
2002	1649
2003	1912
2004	1151
2005	884
2006	627
2007	829
2008	649
2009	595
2010	434
2011	327
2012	139
2013	175
2014	61
2015	87
2016	132
2017	207
2018	298
2019	297
2020	292

Fuente: Elaborado por el autor a partir informe de pos acuerdo traumático: coletazos en la transición desde el acuerdo de paz al posconflicto (INDEPAZ, 2020).

Gráfico 1: Evolución de Asesinatos de líderes sociales 2002 - 2020



Fuente: Elaborado por el autor a partir informe de pos acuerdo traumático: coletazos en la transición desde el acuerdo de paz al posconflicto (INDEPAZ, 2020).

Es inminente la relación de las cifras presentadas en el gráfico 1 con el periodo de gobierno de Álvaro Uribe Vélez y sus sucesores Juan Manuel Santos e Iván Duque, en su política de defensa y seguridad democrática, en sus administraciones se ha demostrado como los procesos de conflicto social se han finalizados. La sociedad colombiana convive con el miedo a reclamar, a demandar públicamente sus derechos, a cuestionar los relatos sobre las víctimas, impuestos durante años a través de su maquinaria de propaganda de guerra.

Santos consideraba que a Colombia como un país “nuevo” gracias a los temas de crecimiento económico y el proceso de paz con las FARC-EP, haciendo referencia a la necesidad de recuperar el liderazgo que le corresponde al país, dentro del ámbito internacional, mediante su experiencia de construcción de paz y posconflicto, pasaron a ser parte del imaginario del gobierno precedente.

El gobierno de Iván Duque procede primero, desvalorizando el acuerdo de paz para mostrarlo como hecho sin mayor trascendencia. De manera que su implementación cumpliendo lo pactado, sería fortalecer el “castro chavismo” para la región frente ante la imposibilidad política. Seguidamente, la perseverancia de la violencia política demostraría la inutilidad el acuerdo de paz, dentro de sus acciones justificables remite al retorno de la política de “seguridad democrática”, impuesta por el gobierno de Álvaro Uribe, en sus dos gobiernos, en lugar de una capacidad de reconstrucción de paz. (ESTRADA, 2019).

El gobierno de Duque, presenta en su mandato el primer proyecto de acto legislativo, el insistentemente la tentativa por parte del Centro Democrático hacer tizas, el Acuerdo de Paz, por el cual pretendía establecer una reforma al Acto Legislativo 01 del 2017, el cual pretendía desincentivar la comparecencia de los miembros de la fuerza pública ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuyo objetivo principal era ocultar la posibilidad de conocer la verdad procesal del conflicto armado, ampliando la impunidad e impidiendo acabarla.

MOVILIZACIONES CONTRARIAS DE RECHAZO 2019-2021

De acuerdo con Carolina Jiménez, informa en su artículo geografías de la rebeldía y la dignidad popular sobre las movilizaciones en Colombia, el jueves 29 de abril del 2021, millares de personas, dentro de los cuales predominaba jóvenes, salieron a las calles ocupando espacios públicos como plazas, vías representativas, parques, para expresar su impugnación frente al gobierno de Iván Duque, del proyecto económico y político que él representa. A partir de ese día, dentro del contexto mundial de la pandemia causada por el virus SARS-COVID 19, pese a las restricciones derivadas ante esta crisis, con la represión estatal y fallos judiciales, se ha configurado Colombia en rebeldía, en contra del neoliberalismo y la fascistización del régimen. De esta manera en el país, ha constituido una geografía de la rebeldía, mediante la representación del alza de las voces perdiendo el miedo en relación con las acciones opresoras, marciales y antidemocráticas (JIMÉNEZ; LIBREROS; *et al.*, 2021).

Como lo menciona Carolina J., este levantamiento del pueblo colombiano no es ajeno a la historia, pues la población sale por los acúmulos de las diferentes luchas populares, entre la movilización de la defensa por la educación en el paro del 21 de noviembre del 2018, rechazando el llamado “paquetazo neoliberal de Duque”, la masacre de los jóvenes en Soacha en septiembre de 2020, la lucha territorial indígena, el rechazo por el asesinato de líderes sociales y sobre todo las manifestaciones a favor del proceso de paz. En una sociedad en que vivía con un miedo otorgado por el mismo Estado, se dio a la lucha e salir a las calles, en medio de la pandemia, en la búsqueda de un cambio trascendente por el Estado y se puede afirmar una total disputa contra-hegemónica en respecto al uribismo.

Colombia vive por un clima de agitación política, la pandemia marco profundamente las desigualdades, desvelando la realidad capitalista, en especial con los asalariados tradicionales, independientes, informales, bajo y otros, que están bajo las formas desiguales de distribución de la riqueza. De acuerdo con Moncayo “ (...) al concluir el año 2020 Colombia tenía más de 21 millones de habitantes en condiciones de pobreza y 7,5 millones en pobreza absoluta (...)” (2021, p.8), en esta coyuntura en la que está inmersa la población, se desarrolla una reforma tributaria, la cual afectaría la población de clase media y baja. La reforma tributaria planteada por el gobierno de Duque radicaba en pasar a cobrar el impuesto de renta a población que devengaran un salario mensual más de US\$663, y como adherido la cobranza del Impuesto del Valor Agregado (IVA) a servicios públicos como agua, energía y gas ep, servicios fúnebres, equipamientos electrónicos, y otros rubros. De manera, que Ivan Duque pretendía que el pueblo pagara por las oscilaciones macroeconómicas, empeorados por la pandemia mundial, represando cada vez más a la clase trabajadora y en específico a los más vulnerables; pretendiendo hundir la miseria, bajo las acciones del neoliberalismo (JIMÉNEZ, LIBREROS e *at.*, 2021).

La ocupación del territorio constituyo una nueva realidad en espacio y tiempo, las empresas, comercios debían parar sus actividades y cerrar sus puertas. Las estatuas de los conquistadores fueron derrumbadas y las vías principales del país fueron bloqueadas geográficamente estratégicas, por el derecho a vivir dignamente y por una Colombia mejor. El principal motivo no cabe duda fue la reforma tributaria “Ley de solidaridad sostenible” una ley que pretendía cargar a la clase trabajadora. La población colombiana reclamó a gritos la transformación del orden social.

Las movilizaciones han desbordado por todo el territorio durante el mes de mayo, demostrando de manera exacta el repudio contrala figura de Álvaro Uribe Belez, el cabecilla más influyente durante las últimas décadas. Según JIMÉNEZ, LIBREROS & *at.* “(...) Estamos en presencia de la fractura simbólica de un factor de poder dominante de la escena política nacional, de todo un cambio de época que implica además una crisis de hegemonía (...)” (2021, p.25). El país tiene plena consciencia que el uribismo está asociado al paramilitarismo y su relación directa con el Estado y dicha correlación ha sido instrumento para mantener en posición de autoridad de la población.

En relación a lo ocurrido en Colombia, se debe tener en cuenta, en primer lugar, la intensificación de las tensiones sociales expresadas en la calle, que no son hechos espontáneos, pero si a un antecedente estructural detrás de estos fenómenos. De acuerdo con los autores, se trata de una crisis no solo de carácter orgánico si no una crisis hegemónica:

(...) Se trata de una crisis orgánica porque nunca se había presentado una convergencia tan singular entre crisis económica, crisis social y crisis política (...) en parte por los efectos políticos y culturales generados por el acuerdo de paz de noviembre de 2016, efectos que fueron agudizados por una implementación traicionada y luego por la exacerbación de la violencia neoliberal, autoritaria y fascista, que aprovechó la crisis de la pandemia. En segundo lugar, la crisis colombiana también es una crisis de hegemonía puesto que es al mismo tiempo una “crisis de autoridad” y una “crisis de representación” (ZUBIRÍA, LIBREROS, 2021, p.22).

Según los autores estas crisis se comprueban mediante el desacato por parte de la ciudadanía, a las medidas de confinamiento sanitario en respecto a la pandemia, arriesgando sus vidas ante el virus, juntamente con los toques de queda nocturnos y la prohibición de las movilizaciones, a presión del paramilitarismo ((ZUBIRÍA; LIBREROS, 2021), militar y policial, los medios de comunicación deslegitimando la protesta. Por otra parte, el deterioro de los gobiernos neoliberales y su incapacidad de establecer fin al conflicto social. Colombia experimenta una pérdida de capacidad de consenso e intenta tramitar la crisis por las alturas a través de acuerdos entre las élites económicas y los partidos tradicionales.

La legitimidad de la movilización se constituye a partir arranques unidas en protección de los derechos humanos. Dentro de esta coyuntura en la que se unen los problemas estructurales con las especificaciones, se evidencia una inconformidad del país contra el creciente empobrecimiento, que sobre pasa la la reforma tributaria, de salud y educación, es más el sentir la furia, el miedo que se ha despojado de todo para enfrentarse a la opresión por parte de la fuerza pública, obedeciendo a un gobierno incapaz de encontrar salidas distintas a la violencia.

Otra de las caracterizaciones de estos levantamientos es el producto del proceso de paz, reivindicadas en la lucha política. Los movimientos sociales, una sociedad que decide salir y movilizarse para luchar para el derrocamiento de la violencia de su país. Hay una guerra deshonesto, criminal y conjeturada desde el Estado contra de la movilización social, la cual se tiene que acabar (MEDINA, 2021).

De acuerdo con el profesor Medina Gallego, estas movilizaciones fueron caracterizadas como fractal y lo define siendo un modelo de resistencia y movilizaciones en donde “(...) dinámicas particulares que irrumpen con fuerza a través de la movilización multitudinaria y pacífica, acompañada de explosiones de inconformidad popular (...) (MEDINA, 2021, p. 33); fuera de la categorización que constituye una fuerza de no posible intervención en los desiguales espacios del territorio por la población articulados en diferentes expresiones de orden e interés que se activan y se disuelven de manera inquebrantable por medio de múltiples expresiones de movilizaciones pacíficas llenas de un valor diferenciado en creatividad, mediante la fiesta, el arte y la poesía, retirando los gestos de violencia (MEDINA, 2021).

Estas formas de protesta social expresan los acúmulos de inconformidad social, expresados de una forma distinta, en los que se pueden transformar los actos de violencia, como se han caracterizado las manifestaciones anteriores, evidentes de hechos delictivos. Se ve reflejado que el Estado solo concibe el lenguaje rutinario de la violencia, es la misma con que se expresa en el ejercicio de la crueldad policial y las prácticas de crimen y subversión de Estado mediante el uso de las fuerzas parapoliciales y paramilitares (MEDINA, 2021).

CONSIDERACIONES FINALES

Delante este escenario no hay que desconsiderar que el gobierno mediante una política neoliberal, que en medio de una pandemia puso en realce todos los indicadores de pobreza, hambre acumulación económica por parte de las elites y sobre todo las prácticas de violencia institucional que se enfrentó a una sociedad movilizadada, en que no debe se debe olvidar huellas dejadas por el narco estado, sometido por elites tradicionales corruptas.”(...) el único que no ha entendido la dimensión de la protesta es el gobierno autista, experto en engaño y simulación del presidente Iván Duque Márquez (...)” (MEDINA, 2021, p. 39).

El paro nacional obtuvo significativos logros, entre los cuales la anulación de la reforma tributario y la reforma a la salud y aprobaciones parciales en el sistema educativo. Se ha expuesto a la sociedad que la institucionalidad no les soluciona las insuficiencias por el contrario actúa en contramano. Los ayuntamientos populares se empezaron a realizar desde el campo y la ciudad anunciando las salidas desde abajo, mediante una democracia directa. Esta movilización es la explosión a la que ha sido sometido el pueblo colombiano, por la dignidad, por la lucha contra la violencia criminal y opresiva por parte del Estado.

Este uso excesivo del poder también se funda en mantener la idealización de una figura política carismática y popular, no propia, sino de un benefactor político, tal es el caso del gobierno Duque frente a Álvaro Uribe. La creciente desconfianza de los ciudadanos en el gobierno de Duque y sus antecesores, para confrontar con transparencia y capacidad es en resolver conflictos. Existe un creciente descontento que falta gobernabilidad y la autoridad que otorga la constitución a las autoridades, se traza una mayor distancia entre las instituciones y el pueblo. Quizá todo lo anterior no sea sino el precio a pagar por romper con la herencia política de sistemas corruptos.

REFERENCIAS

ALVAREZ, Mauricio. **Interpretaciones de Historia y Memoria del Conflicto Armado Colombiano como Disputa de Hegemonía**. 2018.

CAMPOS, German G., BORDA, Orlando F., LUMA, Eduardo U. **La violencia en Colombia**. Bogotá: Editora Taurus, 2005.

Centro Nacional de Memoria Histórica. **Paramilitarismo. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento histórico**, Bogotá: CNMH, 2018.

ESTRADA, Jairo. **El acuerdo de paz en Colombia. Entre la perfidia y la potencia transformadora**. Cepdipo: Bogotá, 2019.

González, Fernán. **Poder y violencia en Colombia**, Bogotá: Cinep, 2014.

INDEPAZ. **Registro de líderes y personas defensoras de DDHH asesinadas desde la firma del acuerdo de Paz del 24|11|2016 al 15|07|2020**. Bogotá, 15 jul. 2020.

JIMÉNEZ, C., LIBREROS, D. *et al.* **Causas, preliminares y actualidad del conflicto social en Colombia.** Informe de Coyuntura Nacional: Colombia. Otras Voces en Educación, 2021.

MEDINA, Carlos G. **Movilización fractal y explosión popular Una reflexión sobre la protesta legítima.** In: ESTRADA, Jairo. El acuerdo de paz en Colombia. Entre la perfidia y la potencia transformadora. Cepdipo: Bogotá, 2021. p. 33-45.

MONCAYO, Víctor M. **Una nueva clase espectral: A propósito del paro del 28 de Abril.** In: ESTRADA, Jairo. El acuerdo de paz en Colombia. Entre la perfidia y la potencia transformadora. Cepdipo: Bogotá, 2021. p. 5-15.

OLIVEIRA, Renata P. de. Entrevista na Rádio RCI, *Sem Revoluções Os Dilemas das Democracias Neoliberais Andinas*, da Editora Appris. 13 set. 2019.

OLIVEIRA, Renata P. de. *Sem Revoluções: Os Dilemas das Democracias Neoliberais Andinas*. Curitiba: Editora Appris, 2020.

PUELLO-SOCARRÁS, José. **¿Gobernanza y nueva gestión pública para la paz? Reflexiones sobre ajustes institucionales e implementación en el Acuerdo Final.** Pg. 289-312 In: ESTRADA, Jairo (2019) El acuerdo de paz en Colombia. Entre la perfidia y la potencia transformadora. Bogotá: Cepdipo, 2019.

RIPPEL, Marcio P. *O Plano Colômbia como instrumento da política norteamericana para a América Latina e suas conseqüências.* Revista da escola de Guerra Naval, vol. 7, 2006. p. 83.

ZUBIRÍA, Sergio, LIBREROS Giovanni. **Crisis de hegemonía, subjetividades insurgentes y perspectivas.** In: ESTRADA, Jairo. El acuerdo de paz en Colombia. Entre la perfidia y la potencia transformadora. Cepdipo, Bogotá, 2019. p. 21-33.